

Santiago, tres de octubre de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En los autos Rol N° 152.355-2022 de esta Corte Suprema, la Ministra de Fiero señora Marianela Cifuentes Alarcón, por sentencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno, escrita a fojas 7.267 y siguientes, decidió:

I.- Que se condena a Iván de la Fuente Sáez, Alfonso Faúndez Norambuena, Sergio Heriberto Ávila Quiroga y Roberto Arcángel Rozas Aguilera en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado, en grado consumado, en contra de José Manuel Díaz Inostroza, Francisco Javier Lizama Irrarrázaval, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo y Jorge Manuel Pavez Henríquez, cometidos a contar del 13 de octubre de 1973 y de los delitos de secuestro calificado, en grado consumado, en contra de Santos Pascual Calderón Saldaño, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez, Luis Osvaldo González Mondaca, Pedro Juan Meneses Brito y Bautista Segundo Oyarzo Torres, cometidos a contar del 20 de octubre de 1973, a la pena única de dieciocho años de presidio mayor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, con costas.

II.-Que se absuelve a Julio Cerda Carrasco de la acusación formulada en su contra en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado, en grado consumado, en contra de Santos Pascual Calderón Saldaño, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez, Luis Osvaldo González Mondaca, Pedro Juan Meneses Brito y Bautista Segundo Oyarzo Torres, cometidos a contar del 20 de octubre de 1973.



III.- Que se condena a Julio Cerda Carrasco en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado, en grado consumado, en contra de José Manuel Díaz Inostroza, Francisco Javier Lizama Irrázaval, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo y Jorge Manuel Pavez Henríquez, cometidos a contar del 13 de octubre de 1973, a la pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, con costas.

En cuanto a la acción civil, la sentencia de primera instancia estableció un monto de \$ 100.000.000 para los cónyuges y padres, \$ 80.000.000 para los hijos y \$ 50.000.000 para los hermanos.

Apelada dicha sentencia, la Corte de Apelaciones de San Miguel, por sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, que rola a fojas 7.736 y siguientes, la confirmó, con declaración que las demandas civiles deducidas quedan acogidas por las sumas que a continuación se indica y que deberá pagar el Fisco de Chile:

1) Respecto de Rosa del Carmen León Moraga, José Francisco Calderón León y Cristián Alejandro Calderón León, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de cónyuge e hijos de Santos Calderón Saldaño.

2) Respecto de Irma y Adolfo Camus Rodríguez, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de hijos de Benjamín Camus Silva.



3) Respecto de Purísima, Juan, Manuel, Daniel, Carmen, Javier, Elba, Margarita y Cecilia, todos ellos de apellidos Camus Silva, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de hermanos de Benjamín Camus Silva.

4) Respecto de Georgina Salas Farías, Aída Díaz Salas y José Díaz Salas, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de cónyuge e hijos de José Manuel Díaz Inostroza.

5) Respecto de Raquel Rodríguez Henríquez y de Ana, Fernando, Humberto, Raquel, Amanda y Luis, todos ellos de apellidos Donaire Rodríguez, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de cónyuge e hijos de Rolando Donaire Rodríguez.

6) Respecto de Guacolda Araya Mondaca y de Patricia, Marisol, Teresa y Osvaldo todos ellos de apellido González Araya, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de cónyuge e hijos de Luis Osvaldo González Mondaca.

7) Respecto de Francisco, Humberto, Luis, José y Lidia, todos de apellidos González Mondaca, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de hermanos de Luis Osvaldo González Mondaca.



8) Respecto de Fresia Acevedo Rodríguez y de Francisco, Pedro, Mónica, Gloria y Elena, todos de apellidos Lizama Acevedo, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos), en sus calidades de cónyuge e hijos de Francisco Lizama Irarrázaval.

9) Respecto de María Teresa, Patricia y Luis, todos ellos de apellidos Meneses Brito, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de hermanos de Pedro Juan Meneses Brito.

10) Respecto de María Acevedo Manzor y de Carmen, Luis y María, todos de apellidos Ortiz Acevedo, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de cónyuge e hijos de Juan Manuel Ortiz Acevedo.

11) Respecto de Hilda Cerda Cerda y de José, Beatriz, Luzmenia, Jaime, Miguel, Luis y María, todos ellos de apellidos Ortiz Cerda, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de cónyuge e hijos de Luis Celerino Ortiz Acevedo.

12) Respecto de María Irma Solís Solís y de Carolina, Lucía, Arnoldo, Oberlando, Luis, Rosa, Elizabeth, María y Víctor, todos ellos de apellidos Oyarzo Solís, se regula prudencialmente la suma por concepto de daño moral en \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de cónyuge e hijos de Bautista Segundo Oyarzo Torres.

13) Respecto de Vicente Pavez Vera y de Alicia, María y Héctor, todos de apellidos Pavez Henríquez, se regula prudencialmente la suma por concepto de



daño moral en \$ 20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno, en sus calidades de padre y hermanos de Jorge Manuel Pavez Henríquez.

Contra ese último pronunciamiento, los abogados Nelson Guillermo Caucoto Pereira y Andrea Gattini Zenteno por los querellantes que representan, interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la decisión en la parte civil, los que también interpuso la abogada Carmen Delia Ortiz Acevedo, por sí y por sus representados María del Tránsito Acevedo Manzor, María Magdalena Ortiz Acevedo y Luis Humberto Ortiz Acevedo.

A su vez, los abogados de los condenados Julio Cerda Carrasco, Alfonso Faúndez Norambuena y Roberto Arcángel Rozas Aguilera interpusieron recurso de casación en el fondo y la defensa del condenado Iván de la Fuente Sáez impetrio arbitrios de nulidad formal y sustancial.

Con fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**I.- En lo tocante a la sección penal del fallo impugnado.**

**Primero:** Que el recurso de casación en la forma deducido por la defensa de Iván de la Fuente Sáez se funda en el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, por no haber sido extendida la sentencia en la forma prevista en la ley, en relación con los artículos 500 N° 3 y 4, por falta de exposición de los hechos imputados y las consideraciones para tener por probada la participación, y 768 del Código de Procedimiento Civil y 535 del Código de Enjuiciamiento Penal.



Explica que la defensa alegó la circunstancia que a la época en que acaecen los hechos tenía la calidad jurídica de militar, conforme el artículo 6° del Código de Justicia Militar, por lo que fue trasladado el 11 de septiembre de 1973 hasta la comuna de Santiago, específicamente hasta La Moneda, por lo que y, según lo señaló claramente en sus declaraciones, no se encontraba en el lugar donde ocurrieron los secuestros de las víctimas.

Agrega que tal circunstancia se ratifica por la existencia de una causa en la Corte Suprema, rol N° 36.665-2019, que dice relación con hechos acaecidos en fechas cercanas a las que se le condena en San Miguel, pero que corresponde a la jurisdicción Santiago.

Expresa que, siendo alrededor de cuarenta y cinco episodios los que se refieren a Paine, resulta curioso que este sea el único episodio en que se investigó y condenó al acusado.

Arguye que el único elemento de cargo que existe en la causa es la hoja de vida del acusado en la que consta que pertenencia a la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Expresa que los sentenciadores no reseñan de qué modo se llegó a la convicción que el encartado era autor de los delitos que se le imputan, en especial las pruebas que obran en el proceso en su contra, solo se limita a señalar declaraciones de uniformados que reseñan que el encartado pertenencia a la Escuela de Infantería de San Bernardo, por lo que carece de lógica que lo vinculen con alguna de las víctimas de autos, circunstancias que hacen imposible elaborar una debida defensa, toda vez que no es posible saber si el acusado las detuvo, secuestró o interrogó.



Hace presente que, por otra parte, alegó las circunstancias atenuantes de los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, como la eximente incompleta de responsabilidad penal contemplada en el artículo 10 N° 10 del Código Penal, alegaciones que no fueron consideradas ni ponderadas por los sentenciadores.

En virtud de lo expuesto, solicita se declare que la sentencia es nula y que sea reemplazada, separadamente y sin nueva vista, por un fallo que absuelva a su representado, o en subsidio recalifique su participación.

**Segundo:** Que en lo tocante al recurso de casación en la forma impetrado por la defensa del condenado Iván de la Fuente Sáez, resulta necesario tener en cuenta que la causal esgrimida, se configura cuando la sentencia no contiene: *“Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta”*.

El presente motivo, tiene según constante jurisprudencia, un carácter esencialmente objetivo y para pronunciarse acerca de su procedencia basta el examen externo del fallo a fin de constatar si existen o no los requerimientos que compele la ley, sin que corresponda decidir sobre el valor o la legalidad de las afirmaciones que de él se desprenda (SCS Rol N° 28310-18 de 21 de septiembre de 2021, Rol N° 33661-19 de 25 de junio de 2022, Rol N°22379-2019 de 17 de octubre de 2022, Rol N° 57995-22 de 29 de noviembre de 2022 y Rol N°29911-18 de 30 de noviembre de 2022).

En tales condiciones, el recurso propuesto por la defensa no podrá prosperar, ya que los hechos en que se funda no constituyen el motivo hecho



valer, desde que lo que la sentencia atacada, según se consignó en los fundamentos vigésimo, vigésimo primero y trigésimo cuarto, estableció que el encartado reconoció que a la época de los hechos ostentaba el cargo de Comandante del Batallón de Infantería de la Escuela de Infantería de San Bernardo, así como de las declaraciones de Sergio René Pasten Carrera y Donosor Pantaleón Webar Alvear y las imputaciones del acusado Alejandro Emilio Valdés Visintainer se desprende que los días 13 y 20 de octubre de 1973, en horas de la mañana, un contingente de soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo, bajo el mando del acusado se presentó en los asentamientos Mansel Alto, El Patagual, Rangue, Huiticalán y El Vínculo, situados en las proximidades de la laguna de Aculeo y detuvo a las víctimas mencionadas.

Luego, aseveró que los hechos fueron ejecutados por una pluralidad de personas que se unieron con vocación de permanencia bajo estos fines, ya que de los diversos testimonios de soldados y oficiales de la Escuela de Infantería de San Bernardo y de víctimas de privaciones ilegales de libertad, aparece que el centro de detención clandestino establecido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, en el cuartel de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el Cerro Chena, se mantuvo funcionando varios meses, período en que estuvieron un número importante de personas que fueron sometidas a interrogatorios y malos tratos con el fin de obtener información acerca de sus actividades políticas, entre ellos, las víctimas, detenidos en diversos asentamientos campesinos, ubicados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo en el contexto del operativo dirigido por Iván de la Fuente Sáez, secundado por los oficiales Cerda Carrasco y Valdés Visintainer, entre otros.





Además, se asevera que, el concierto con que actuaron los agentes se colige de la forma en que se realizaron los operativos, así como la detención selectiva de algunos campesinos vinculados a cargos directivos en los diversos asentamientos, la organización existente en el centro de detención y la división del trabajo criminal, correspondiendo a cada uno de ellos una función esencial para el éxito del hecho.

De lo referido precedentemente se desprende que el fallo impugnado entrega de manera pormenorizada los hechos y fundamentos que permiten tener por acreditada la imputación formulada contra Iván de la Fuente Sáez, en relación con el delito que se tuvo por configurado, lo que resultó ser consecuencia de la comprobación de los presupuestos fácticos que son susceptibles de ser subsumidos en el artículo 141 inciso final del Código Penal, que se desprende de los razonamientos mencionados precedentemente.

Así las cosas y teniendo en particular consideración que la finalidad de la casación formal no es ponderar la razonabilidad de otras posibles conclusiones, verificar si el fundamento expresado ha sido o no arbitrario ni menos enmendar los errores o falsas apreciaciones en que pueda incurrirse en la señalada tarea, al encontrarse fundada la atribución de participación del recurrente en los hechos por los cuales ha sido condenado, corresponde desestimar el motivo esgrimido por el impugnante.

**Tercero:** Que previo al análisis de los recursos de casación en el fondo interpuestos por los condenados, cabe establecer que la sentencia de primera instancia, en su considerando décimo séptimo, tuvo por acreditados los siguientes hechos:



*“1° Que el día 13 de octubre de 1973, a partir de las primeras horas de la mañana, un contingente militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, acompañado de un funcionario policial del Retén Pintué de Carabineros de Chile y de un civil del sector, realizó allanamientos y detenciones selectivas en diversos asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, situados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo, en la comuna de Paine, entre ellos, Mansel Alto, Patagual y Rangué.*

*2° Que, en ese contexto, los militares detuvieron, sin derecho, a obreros agrícolas que detentaban cargos directivos en los referidos asentamientos campesinos: José Manuel Díaz Inostroza, Presidente del asentamiento Mansel Alto; Francisco Javier Lizama Irrarrázaval y Jorge Manuel Pavez Henríquez, Presidente y Tesorero, respectivamente, del asentamiento El Patagual y los hermanos Juan Manuel Ortiz Acevedo y Luis Celerino Ortiz Acevedo, Presidente y Vicepresidente del asentamiento Rangué.*

*3° Que, acto seguido, los detenidos fueron trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en el cerro Chena, lugar en que fueron encerrados y sometidos a interrogatorios y malos tratos.*

*4° Que el día 20 de octubre de 1973, a partir de las primeras horas de la mañana, un contingente militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo llevó a cabo nuevos allanamientos y detenciones selectivas en los asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, situados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo, entre ellos, El Vínculo, Huiticalán y El Patagual, oportunidad en que*



*condujeron hasta el lugar a los hermanos Juan Ortiz Acevedo y Luis Ortiz Acevedo, a quienes mantenían aún bajo su custodia.*

*5° Que, en ese contexto, los militares detuvieron, sin derecho, a directivos de los referidos asentamientos campesinos: Pedro Juan Meneses Brito, Presidente del asentamiento El Vínculo y Luis Osvaldo González Mondaca, Presidente del asentamiento Huiticalán y a los obreros agrícolas Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres.*

*6° Que, luego, los detenidos fueron trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el cerro Chena, lugar en que fueron encerrados y sometidos a interrogatorios y malos tratos.*

*7° Que los contingentes militares que llevaron a cabo los allanamientos y detenciones antes referidos actuaron bajo el mando del Mayor Iván de la Fuente Sáez, el Capitán Francisco José Rojas Martínez y los tenientes Julio Cerda Carrasco y Alejandro Valdés Visintainer.*

*8° Que, por otra parte, en la época de los hechos, el campo de prisioneros del cerro Chena estuvo a cargo del Capitán de Ejército Víctor Raúl Pinto Pérez, actualmente fallecido y el Teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena.*

*9° Que, en ese período, se desempeñaron como interrogadores en el referido campo de prisioneros: el Teniente de Ejército Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, el Teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y los oficiales de la Policía de Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.*



*10° Que los detenidos, en lugar de ser puestos a disposición del tribunal competente, fueron ejecutados mediante disparos con arma de fuego y sus cuerpos inhumados ilegalmente o abandonados.*

*11° Que, de ese modo, el 23 de octubre de 1973, en la ribera del río Maipo, a la altura del puente Maipo, se encontraron los cadáveres de José Manuel Díaz Inostroza -detenido el 13 de octubre de 1973- y de Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Luis Osvaldo González Mondaca y Pedro Juan Meneses Brito -detenidos el 20 de octubre del mismo año-.*

*12° Que, seguidamente, el 13 de noviembre de 1973, en el interior del fundo San Vicente de Lo Arcaya, comuna de Pirque, fueron encontrados semienterrados y en estado de putrefacción los cadáveres de Francisco Javier Lizama Irrarrázaval, Juan Manuel Ortiz Acevedo y Luis Celerino Ortiz Acevedo -detenidos el 13 de octubre de 1973- y de Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres -detenidos el 20 de octubre del mismo año-.*

*13° Que, finalmente, los restos de Jorge Manuel Pavez Henríquez, detenido el 13 de octubre de 1973, fueron encontrados en la tumba N° 2.476 del Patio 29 del Cementerio General.”*

Los hechos descritos fueron calificados como los delitos de secuestro calificados consumados de José Manuel Díaz Inostroza, Francisco Javier Lizama Irrarrázaval, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo y Jorge Manuel Pavez Henríquez, cometidos a contar del 13 de octubre de 1973, y los delitos de secuestro calificado consumados en contra de Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez, Luis Osvaldo González Mondaca, Pedro Juan Meneses Brito y Bautista Segundo



Oyarzo Torres, cometidos a contar del 20 de octubre de 1973, ilícitos descritos y sancionados en el artículo 141 inciso final del Código Penal.

**Cuarto:** Que el recurso de casación sustancial deducido por la defensa del condenado Julio Cerda Carrasco se funda, en primer lugar, en la causal establecida en el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal —sobre error en la aplicación de la pena—, y que a su juicio es la única que apunta a la participación criminal, por lo que no puede razonablemente -sin afectar el derecho de defensa constitucionalmente consagrado- excluir un espectro tan importante como son los fallos absolutorios o los fallos condenatorios, atacados para lograr la absolución. Así las cosas, un aspecto tan determinante como la participación criminal, sólo podría impugnarse por la vía de la casación en el fondo en los casos de sentencias condenatorias y cuando la pena impuesta hubiere incurrido en error de derecho que determine una pena más o menos grave que aquella que corresponda con arreglo a la ley.

En el caso sub-lite, la sentencia impugnada incurre en un error de derecho al determinar la participación que le cupo al encartado en el delito, pues estableció que el acusado participó en calidad de autor conforme al artículo 15 N° 3 del Código Penal, respecto del secuestro calificado de cinco personas, en circunstancias que del mérito del proceso se evidenció que Julio Cerda no desplegó el día 13 de octubre de 1973 conducta alguna de autoría en los secuestros calificados que se le atribuyen.

El acusado Julio Cerda -sin estar concertado con otros grupos de civiles y militares- que operaron en la zona de Aculeo el día 13 de octubre de 1973, cumpliendo órdenes que le fueron impartidas en Santiago, el día 12 de octubre de



1973 en la tarde, realizó en los cordones montañosos del nor-este de Aculeo un rastrillaje para detectar armas en dicho lugar, que como es obvio, al ser una zona deshabitada hacía imposible la detención de personas.

Agrega que, en la sentencia condenatoria no existe un solo testimonio que señale que el acusado haya detenido o encerrado a las cinco víctimas en un plan delictual común, facilitando los medios para materializar los secuestros, ni que se concertó previamente con otros civiles y militares que operaron el día 13 de octubre de 1973, en la mañana, para cometer los delitos atribuidos.

Precisa que el acusado el día de los hechos, estaba a una distancia no menor de diez kilómetros de los sectores en que fueron detenidas las víctimas en los Asentamientos "Mansel Alto", "Patagual" y "Rangue", por lo que mal pudo haber estado en dichos lugares a la misma hora.

Agrega que ninguno de los efectivos del Ejército, Carabineros e Investigaciones le atribuye algún tipo de participación. Es más, el teniente de Carabineros Sergio Ávila, y los dos efectivos de Investigaciones declaran no conocer al encartado. Por su parte, el teniente Magaña fue explícito en señalar que el acusado volvió a la Escuela de Infantería de San Bernardo a fines de noviembre o principios de diciembre de 1973.

A continuación, esgrime la causal del artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 1, 15 N° 3 y 141 del Código Penal; 19 y 20 del Código Civil, 19 N° 3 inciso 8 de la Constitución Política de la República y 459 del Código de Enjuiciamiento Penal.

Señala que en el caso sub-lite, la sentencia recurrida incurrió en un error de derecho al determinar la participación que le cupo a su defendido en el delito. En



efecto, la sentencia recurrida estableció que participó en calidad de autor, conforme al artículo 15 N° 3 del Código Penal, en los secuestros calificados de cinco personas, en circunstancias, que del mérito del proceso se demostró que no desplegó el día 13 de octubre de 1973 alguna conducta de coautoría en los delitos que se le atribuyen.

Afirma que se violaron flagrantemente las leyes reguladoras de la prueba, ya que no existe un solo testigo que acredite que su defendido detuvo o encerró el día 13 de octubre de 1973 a las víctimas de la presente causa.

Finalmente, para reforzar lo expuesto, de las cinco personas que operaban en el Centro de Detención denominado "Casa de Techo Rojo", tres no conocían a Julio Cerda. Otro señala que regresó a la Escuela de Infantería de San Bernardo a fines de noviembre o principios de diciembre de 1973 y un último, no aportó antecedentes sobre este particular.

A mayor abundamiento, para acreditar el hecho de la existencia de un Centro de Detención en la Escuela de Infantería de San Bernardo, declararon treinta y seis testigos y solo existen cinco testimonios que se refieren a Julio Cerda Carrasco.

Por ello, solicita se anule la resolución impugnada y se proceda a dictar, acto continuo y sin nueva vista, la correspondiente sentencia de reemplazo, en que se absuelva a Julio Cerda Carrasco, en cuanto autor en los términos del artículo 15 N° 3 del Código Penal, respecto de los cinco secuestros calificados ocurridos el día 13 de octubre de 1973, en la zona de Aculeo.

**Quinto:** Que el arbitrio deducido por el condenado Cerda Carrasco descansa en el numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal,



que permite la invalidación cuando la sentencia, aunque califique el delito con arreglo a la ley, imponga al hechor una pena más o menos grave que la designada, con error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al delincuente, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya por fin, al determinar la naturaleza y el grado del castigo; lo que el recurrente sostiene por no concurrir los elementos necesarios para sancionarlo e insta, en definitiva, por su absolución.

En tales condiciones, el motivo de nulidad esgrimido no resulta procedente, ya que en su invocación se olvida que la causal aludida está dada para cuestionar sólo aquellos casos donde, si bien se acepta una participación culpable en el ilícito, se cree errada la calificación efectuada en la resolución objetada, como, por ejemplo, si se ha considerado autor a quien únicamente debería conceptuársele cómplice o encubridor. La inexistencia de responsabilidad penal por falta de participación criminal del enjuiciado, la falta de comprobación del hecho punible, la concurrencia de eximentes o de causales de extinción de la responsabilidad criminal no encuentran cabida en esta causal que, por ende, no habilita para solicitar la absolución, como lo persigue el desarrollo de sus apartados, conclusión que el propio tenor del precepto ratifica cuando expresa que el error de derecho denunciado debe haber conducido a imponer al justiciable una pena más o menos grave que la asignada en la ley -lo que implica una culpabilidad establecida-, de modo que su ámbito tampoco puede extenderse a la hipótesis propuesta, motivo por el cual la causal en análisis será desestimada.





**Sexto:** Que, en lo referente a la causal fundada en el artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal —de violación a las leyes reguladoras de la prueba— esgrimida en el arbitrio impetrado por la defensa de Julio Cerda Carrasco, de inmediato se observa un cuestionamiento al ejercicio de ponderación de los antecedentes probatorios, aseverando que la decisión de condena respecto del encartado se sostiene por encontrarse en una zona cercana a la ocurrencia de ellos hechos, sin que se encuentre acreditado que haya intervenido de alguna forma en la privación de libertad y encierro de las cinco víctimas.

En este caso, lo cierto es que el recurso se construye sobre una nueva valoración de los medios probatorios y se protesta de la manera en cómo los sentenciadores del grado justipreciaron los mismos, lo cual conforma una parte de la soberanía de los jueces de fondo en su facultad sobre la determinación de los hechos. Tal postulado le impide a la Corte Suprema rever los hechos y la obliga a aceptarlos. De ello, ya lo ha explicado la doctrina al sostener que *“a los jueces de la instancia les corresponde el establecimiento de los hechos y para este efecto disponen de la facultad privativa y soberana de valorar el mérito intrínseco de los diversos medios legales de prueba acumulados en la causa, sin que el ejercicio de esta facultad de ponderar y comparar discrecional y subjetivamente esos mismos elementos del proceso, esté sujeto a la censura del tribunal de casación, ni pueda caer dentro del ámbito en que opera la causal del N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, puesto que las leyes reguladoras de la prueba, cuya infracción da base al recurso de casación en el fondo, son sólo aquellas que establecen prohibiciones o limitaciones a la facultad antedicha, como lo sería la admisión en los fundamentos del fallo de antecedentes ajenos a los medios de*



*prueba reconocidos como tales por el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 56, citado en la obra Tratado de Derecho Procesal Penal. T. II, Pág. 393 y 394, del autor Rafael Fontecilla Riquelme).*

Esta posición conforma una marcada tendencia jurisprudencial, en donde la acción revisora de la Corte Suprema se encuentra limitada, salvo que los jueces violenten las normas reguladoras de la prueba, siendo necesario describir de manera precisa y clara la forma en cómo se ha producido dicha vulneración, se indiquen específicamente las reglas probatorias, y que ello, por supuesto, tenga influencia en lo dispositivo del fallo. Tal característica no está presente en este caso, pues el recurrente sólo propone una valoración diversa de las declaraciones que describen y enumeran las normas legales que se denuncien violentadas, pero no refiere ni precisa cuál o cuáles reglas probatorias han sido desatendidas, lo que provoca el rechazo del arbitrio propuesto.

**Séptimo:** Que el recurso de casación en el fondo del condenado Iván De La Fuente Saez se funda en la causal contemplada en el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 485 del mismo cuerpo legal, en relación con los artículos 10 N° 10, 11 N°9, 15 N° 1, 16, 141 del Código Penal, artículo 211 y 214 del Código de Justicia Militar.

Explica que el fallo recurrido ha incurrido en un error de derecho al aplicar el artículo 15 del Código Penal, sin tener elementos de pruebas que confirmen o aseveren que su representado, detuvo, secuestro, interrogó a las víctimas de autos, de modo tal que establezca la responsabilidad penal grupal, conforme al mando y jerarquía militar de la época, condenando a numerosas personas en



calidad de autores, sin fundar debidamente la decisión ni citar los argumentos utilizados para distinguir entre los distintos tipos de autoría, ni pudiendo simplemente establecer la acción u omisión que, siendo típica, antijurídica y culpable se le imputa a cada uno de ellos, situación, que el tribunal a quo en largos años de investigación, también fracaso en realizar.

Señala que se debió recalificar la participación de su representado de autor a encubridor, debiendo además estimar que le favorecen las atenuantes del artículo 211 y 214 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 10 N° 10 del Código Penal y reconocerle la atenuante del artículo 11 N° 9 del mismo cuerpo legal.

Agrega que, para una correcta aplicación de las normas sobre participación criminal, es indispensable que los hechos se encuentren claramente establecidos y para que ello ocurra con pleno respeto a las normas sobre el debido proceso y un adecuado ejercicio del derecho a la defensa, es menester que en dicho establecimiento fáctico se expresen las conductas individuales desarrolladas por cada imputado para que dicha conducta pueda ser enmarcada dentro de alguna de las hipótesis de los artículos 15, 16 o 17 del Código Punitivo.

Así las cosas y en concreto, en el peor escenario posible, se entendiera igualmente que, aun no estando el lugar de los hechos, pero por ser el segundo a cargo de la Escuela de Infantería de San Bernardo, habrían tomado conocimiento de los hechos investigados, por lo que el tribunal debió condenarlo en calidad de cómplice o encubridor, debido al conocimiento que él no tenía, pero el tribunal presume, pero en ningún caso como autor.



Indica que era correcta la aplicación de la eximente de responsabilidad contenida en el artículo 10 N° 10 del Código Penal, toda vez que claramente la orden de detener a las víctimas no emanó del acusado, si no que esta orden se cumplió porque provino de algún superior jerárquico.

Agrega que debieron aplicarse los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, así como la media prescripción contemplada en el artículo 103 del Código Penal, debiendo en consecuencia aplicarse al menos un grado bajo el mínimo señalado por la ley, es decir, tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, otorgándose la pena sustitutiva de libertad vigilada.

Asimismo, se ha infringido el artículo 68, inciso tercero, del mismo código, por cuanto, concurriendo dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas, y otras atenuantes ordinarias y ninguna agravante, por lo que se ha debido rebajar la pena en al menos un grado al mínimo señalado por la ley.

Concluye pidiendo se acoja el recurso, declarando que la sentencia es nula, y se dicte fallo de reemplazo que recalifique la participación del encartado a cómplice o encubridor, y aplicando la eximente de responsabilidad penal; y junto con ello, aplique las atenuantes de los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, 11 N° 6 y 9 y 103 del Código Penal como muy calificadas.

**Octavo:** Que, respecto de la casación sustancial impetrada por el acusado Iván de la Fuente Sáez, como se desprende de la lectura del recurso, en especial de su petitorio, éste contiene peticiones subsidiarias, ya que, en primer término, se impetra la recalificación de su participación como cómplice o encubridor, sin que se precise cual de aquéllas debe utilizarse y, luego, también solicita la aplicación de la eximente de responsabilidad penal contemplada en el artículo 10 N° 10 del



Código Penal, lo que conlleva la dictación de una sentencia absolutoria. Para culminar pidiendo la aplicación de circunstancias atenuantes muy calificadas.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia reiterada de esta Corte ha declarado improcedente la invocación de una causal de casación en el carácter de subsidiaria, y para el evento de no ser aceptada otra, ya que los requisitos formales del recurso de casación en el fondo, de derecho estricto, no se concilian con la formulación condicional de motivos que pudieran servirle de base (ver Repertorio del Código de Procedimiento Penal, T. III, p. 187, trece fallos en este sentido).

De consiguiente, y como se dijo, el requisito de que las causales de casación deben ser ciertas y determinadas, no se satisface cuando se interponen en forma confusa, imprecisa y abierta, pues se solicita que se recalifique la participación a cómplice o encubridor, sin señalar determinadamente cuál de ellas debe aplicarse. Tampoco se satisface cuando son contradictorias, ya que inmediatamente pedir la condena recalificando la participación se invoca una eximente de responsabilidad que conlleva necesariamente el pronunciamiento de una sentencia absolutoria; ni cuando son confusas, ya que luego, esgrime la concurrencia de circunstancias atenuantes muy calificadas, por lo que solo puede entenderse que tales peticiones se realizan en forma subsidiaria unas de otras y de manera imprecisa, desde que en tales condiciones no sería el recurrente el que señalase determinadamente la ley infringida, sino que sería el Tribunal de Casación el que debería escoger entre ellas cuál es la que ha sido violada. (Repertorio, cit., p. 188).



**Noveno:** Que, en atención a lo razonado precedentemente, no resulta posible admitir las infracciones de derecho alegadas por la defensa del sentenciado Iván de la Fuente Saéz y, en consecuencia, su recurso deberá ser rechazado en todas sus partes.

**Décimo:** Que el recurso de casación en el fondo del condenado Alfonso Faúndez Norambuena esgrime las causales contempladas en el artículo 546 N° 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 488 numeral 1° y 2° primera parte del mismo cuerpo legal y los artículos 1, 14, 15, 141 del Código Penal, y los artículos 109 y 456 bis del Código de Enjuiciamiento Penal.

Expresa que de la declaración judicial de su representado consta que negó tener participación en los hechos, así como no reconoció haber estado a cargo del centro de detención que funcionaba en el Cerro Chena.

Indica que de los presuntos elementos de cargo que enumera la sentencia, no se demuestra ni se acredita la responsabilidad penal del acusado en los hechos investigados y, asimismo, cabe señalar que, del mérito de los presuntos elementos de cargo de autos, no es posible establecer su culpabilidad.

Precisa que en las declaraciones que el tribunal funda su decisión de tener por acreditada la autoría del encartado, no se menciona a Faúndez Norambuena, haciendo referencia a militares en abstracto y a un retén de Carabineros, por lo que es imposible que tengan aptitud para condenarlo.

Por ello, concluye que la sentencia recurrida, no tiene los suficientes elementos probatorios para que un tribunal adquiriera la convicción necesaria para condenar a su representado, según lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, sino que dicha sentencia intenta construir su culpabilidad



de manera inconexa, en parte, precisamente por la falta de información relevante y por existir una serie de elementos vitales para demostrar la falta de participación directa en los hechos investigados.

Añade que se presentaron una serie de antecedentes probatorios que darían cuenta de que el jefe del Campo de Prisioneros no era el acusado, sino que Víctor Pinto Pérez, los que no fueron consignados por los sentenciadores, sin hacerse cargo de ellos ni valorarlos.

Señala que hay sentencias de la Corte Suprema que establecen que el encargado era el capitán Víctor Raúl Pinto Pérez y no el teniente Alfonso Faúndez, según consta en las causas roles 6379-2010, 6381-2010, y 6382-2010, todas de fecha 25 de octubre de 2011.

Precisa que en el proceso no hay testigos que hayan declarado en contra de su representado durante el plenario, según lo dispuesto en el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, lo que impide que puedan ser utilizados por dicho sentenciador.

Por ello, solicita se invalide el fallo y dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se resuelva, precisamente, que se anula la sentencia recurrida que condena a su representado como autor de los delitos indicados, y se declare que se le absuelve por falta de participación penal.

**Undécimo:** Que el recurso de casación en el fondo impetrado por el condenado Roberto Arcángel Rozas Aguilera, se funda, en primer lugar, en la causal del artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 1, 15 N° 3 y 141, inciso tercero del Código Penal.



Explica que alguna jurisprudencia ha sostenido que esta causal sólo puede invocarse en tanto exista una sentencia condenatoria que impone al delincuente una pena, cuando ésta, en virtud del error de derecho es más o menos grave que la designada en la ley, lo que carece de fundamento, por cuanto tratándose de la única causal de casación en el fondo que apunta a la participación criminal, no podría razonablemente -sin afectar el derecho a defensa constitucionalmente consagrado– excluir un espectro tan importante como son los fallos absolutorios o los fallos condenatorios, impugnados para lograr la absolución.

Expresa que se infringe el artículo 1° del Código Penal, pues de los antecedentes de autos no era posible para los sentenciadores formarse la convicción necesaria sobre la culpabilidad y la voluntariedad suficientes requeridas por esa disposición, atendido que el cometido del detective Rozas Aguilera se apegó en todo instante a la normativa institucional vigente.

Agrega que en el fallo impugnado no se señala ningún medio de prueba directo o indiciario que permita acreditar la participación concertada del acusado, en los términos del numeral 3° del artículo 15 del Código Penal.

Luego, como segunda causal, esgrime la contemplada en el artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 549, 488 N° 1 y 2, primera parte, atendido que deben reunirse una serie de requisitos para que las declaraciones de testigos hagan plena prueba, los que en este caso no concurren, pudiendo concluir que los juzgadores han establecido la participación penal de su defendido, mediante presunciones judiciales. Sin embargo, se acreditó la participación penal del acusado únicamente por declaraciones carentes de contenido que pudieren atribuirle alguna responsabilidad, verificándose de tal





forma en el proceso meras sospechas o indicios que no lograron siquiera fundar una presunción judicial propiamente tal.

Por ello, pide acoger el recurso en todas sus partes, declarando la nulidad del fallo y acto seguido, dicte sentencia de reemplazo que, aplicando correctamente la ley penal, absuelva a su representado.

**Duodécimo:** Que en lo concerniente a la causal fundada en el artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, impetrada por las defensas de Faúndez Norambuena y Rozas Aguilera, en tanto persigue la absolución como consecuencia de la falta de prueba de participación en el delito, se enfrenta a los hechos establecidos en la sentencia, los que solo pueden ser alterados si se demuestra que en su establecimiento se vulneraron las leyes reguladoras de la prueba.

Sin embargo, la denuncia que a este respecto se formula por ambos recursos, en realidad, revela que lo objetado es la ponderación de los elementos de convicción en torno a la participación, materia que se aparta del control de este tribunal, pues importaría volver a examinar los medios probatorios que ya fueron justipreciados por los sentenciadores del grado en el ejercicio de sus facultades exclusivas y revisar las conclusiones a que ellos han llegado, lo que por cierto está vedado, pues desnaturaliza el arbitrio en estudio, el que debe fundarse exclusivamente en temas de derecho. Como los jueces del fondo son soberanos en lo que atañe al establecimiento de los hechos y a la valoración de la prueba que obra en la litis con arreglo a las leyes rectoras, la distinta apreciación que de esta última pueda hacer el recurso conforme a la cual arriba a conclusiones diversas, como queda en evidencia de la lectura de estos, no faculta a esta Corte



para revisar la decisión, por no quedar tal devenir dentro de la esfera de control de este Tribunal de Casación.

**Décimo tercero:** Que en lo referente a la infracción al artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, también invocada por ambos recurrentes, tal como se señaló en el considerando quinto de este fallo, permite la invalidación cuando la sentencia, aunque califique el delito con arreglo a la ley, imponga al hechor una pena más o menos grave que la designada, con error de derecho, por lo que no resulta procedente, ya que supone la aceptación de una participación culpable en el ilícito, y en este caso se funda en la inexistencia de responsabilidad penal por falta de participación criminal de los enjuiciados mencionados, la que no encuentra cabida en esta causal que no habilita para solicitar la absolución, como lo persigue el desarrollo de los arbitrios.

Por las reflexiones anteriores la segunda causal de los recursos será desestimada.

## **II.- En lo referente a la parte civil de la sentencia recurrida:**

**Décimo cuarto:** Que el recurso de casación en la forma presentado por la abogada señora Carmen Delia Ortiz Acevedo invoca la causal del artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la sentencia no fundamenta la decisión de rebajar los montos indemnizatorios.

Expresa que aducir que la indemnización que a cada actor corresponde debe ser aquella que este´en consonancia con otras que en sede judicial se han otorgado en casos similares, exige señalar dos o más sentencias jurisdiccionales dictadas en casos similares.



Indica que en la sentencia atacada no existe exposición de los raciocinios que le sirven de soporte, en todos sus extremos, por lo que no se ha cumplido con la ley, rebajando el monto indemnizatorio que había sido concedido a los actores civiles, cambiando la cifra, a pesar de la trascendencia de esta decisión.

Finaliza solicitando se acoja el recurso, se anule la sentencia y, acto seguido y sin nueva vista, dicte el respectivo fallo de reemplazo, por el cual se confirme la sentencia definitiva de primera instancia en el aspecto civil.

**Décimo quinto:** Que también interpone recurso de casación en el fondo invocando la infracción al artículo 5, inciso segundo, de la Constitución Política de la República de 1980, en relación con el artículo 24, párrafos 1 y 4, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Personas, en relación, a su vez, con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Explica que las infracciones se cometen por falsa aplicación de la ley, puesto que la sentencia de segunda instancia prescinde de la ley para casos en que ella debe ser aplicada.

Finaliza pidiendo se anule la sentencia impugnada y acto seguido, pero de forma separada, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que acoja en todas sus partes las demandas civiles impetradas en favor de las demandantes, determinando un monto indemnizatorio adecuado y justo, acorde al mérito de los fundamentos que obran en el proceso.

**Décimo sexto:** Que, a su turno los abogados Nelson Guillermo Caucoto Pereira y Andrea Gattini Zenteno Nelson interpone arbitrio de nulidad formal, fundado en el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal en relación con



el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, atendido que el tribunal de segunda instancia no fundamenta ni justifica suficientemente para cada caso en particular, cuáles fueron las consideraciones de hecho y de derecho que tuvo en cuenta para tomar la decisión de rebajar los montos de las indemnizaciones de todos los demandantes en la presente causa.

Incluso el fallo es también contradictorio porque si bien comparten los razonamientos para rechazar las excepciones opuestas por el Fisco, acto seguido toma en consideración los pagos que ha hecho el Estado para la reparación de las familias de víctimas de crímenes de lesa humanidad, pagos que ni siquiera especifica, sino que refiere de forma general, acogiendo de forma encubierta la excepción de pago o “*reparación satisfactiva*” alegada por el Fisco de Chile.

Concluye solicitando se invalide el referido fallo, y, acto seguido, pero sin nueva vista, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo por la cual confirme en todas sus partes el aspecto civil de la sentencia definitiva de primera instancia.

**Décimo séptimo:** Que también interponen recurso de nulidad sustancial fundado en la infracción de los artículos 1 inciso primero, 5 inciso segundo y 19 N° 2 y N° 3 inciso primero de la Constitución Política de la República, 75.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por otra parte, y específicamente respecto al rechazo de la demanda impetrada por Aníbal Octavio Meneses Brito, se infringen por inaplicación los artículos 528 y 529 del Código Orgánico de Tribunales, como también los artículos



2116, 2118 y 2163 del Código Civil y los artículos 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que las indemnizaciones finalmente otorgadas, que fueron notoriamente reducidas por el tribunal de segunda instancia, no se condicen en absoluto con los daños ocasionados a los actores y que fueron debidamente comprobados en juicio, por diversos medios de prueba, en cuanto a su existencia, a su magnitud y extensión. Así, las normas señaladas se han incumplido desde que los demandantes se han visto impedidos de obtener una reparación justa y adecuada por los crímenes cometidos en las personas de sus familiares.

Agrega que, respecto de la demanda interpuesta por Aníbal Meneses, la Corte la rechaza porque no serían aplicables al caso los artículos 528 y 529 del Código Orgánico de Tribunales, desconociendo la necesidad de terminar el encargo que se les encomendó a los abogados, el cual significa resguardar absolutamente todos sus intereses en juicio, hasta la completa ejecución de la sentencia.

Termina solicitando se invalide el referido fallo por las causales invocadas, y de forma separada, pero acto seguido, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo por la que se confirme en todas sus partes la sentencia de primera instancia, aumentando los montos indemnizatorios otorgados a los demandantes civiles y acogiendo la demanda impetrada por Aníbal Octavio Meneses Brito.

**Décimo octavo:** Que, de la lectura de los recursos de casación en la forma reseñados se advierte que ambos reprochan a los jueces del fondo haber rebajado la indemnización por el daño moral padecido por los demandantes y rechazar las acciones deducidas, sin efectuar las debidas consideraciones de hecho y de



derecho que sirven de apoyo a su decisión judicial. Con estos argumentos solicitaron la invalidación de la sentencia, a fin de que en su reemplazo se resuelva acoger las demandas, determinando el monto indemnizatorio que fijó el tribunal de primera instancia.

**Décimo noveno:** Que, en relación al vicio de casación formal denunciado, se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran -en lo que atañe al presente recurso- en su numeral 4°, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

**Vigésimo:** Que, esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción



entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que, si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida -prosigue el Auto Acordado- deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe, enseguida, que una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.

**Vigésimo primero:** Que, la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al



tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017, de 8 de enero de 2017).

**Vigésimo segundo:** Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

**Vigésimo tercero:** Que, útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:





*“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras”* (Mosquera Ruiz, Mario y Maturana Miquel, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010, pág. 250).

**Vigésimo cuarto:** Que, el que la determinación del monto dinerario que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por los hechos ilícitos asentados, deba necesariamente realizarse prudencialmente, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no conlleva que esa evaluación sea arbitraria y antojadiza para el órgano jurisdiccional, sino que ante la imposibilidad de concretarla sirviéndose de fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso con base en sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela y moderación, lo que por cierto le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, pero que no implica en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a arribar a esa conclusión.

**Vigésimo quinto:** Que, al dictar la sentencia impugnada en su fundamento undécimo, el tribunal de alzada razona *“Que, sin embargo, los pagos que ha hecho el Fisco y aquellos a los que se encuentre obligado por diferentes*



*disposiciones legales para la reparación de las familias de víctimas de represión política, si bien no constituyen en sí mismos la excepción de pago invocada, sí corresponden a valores y actividad del Estado que debe ser considerada al momento de regular el quantum de la indemnización que se fija por concepto de daño moral cobrado en este proceso, puesto que tanto aquellos pagos como la indemnización por daño moral que aquí se reclama, tienen un mismo antecedente cual es la muerte de un familiar a manos de agentes del Estado.”*

*Agrega a continuación que “si bien la compensación del daño moral procura ser integral, lo cierto es que en caso alguno conseguirá tal objetivo de manera fehaciente, en la medida que el dolor, la aflicción y el pesar causado a los familiares de la víctima por el hecho ilícito, no son dables de cuantificar, motivo por el que al regular el quantum de la indemnización corresponde utilizar como parámetro sumas reguladas en otras causas por hechos similares, en relación con el grado de parentesco de los actores con las víctimas.”*

*Para concluir que “corresponde ajustar los valores que se ha ordenado pagar a sumas que resulten más proporcionadas a las obligaciones ya contraídas por el Estado para el resarcimiento de los daños causados, así como al grado de parentesco en cada caso.”*

Posteriormente atendido el fallecimiento de Aníbal Octavio Meneses Brito con anterioridad a la fecha en que se dedujo acción civil, estima que no son aplicables las normas de los artículos 528 y 529 del Código Orgánico de Tribunales, por cuanto ellas proceden desde que se ejerce la acción respectiva, cuyo no es el caso.



En virtud de lo expuesto reduce los montos de las indemnizaciones y rechaza la demanda de Aníbal Octavio Meneses Brito.

Sin embargo, los sentenciadores no analizan el detalle de los antecedentes que los llevaron a disminuir el monto ordenado pagar al Fisco de Chile por el tribunal de primera instancia, como tampoco contiene las reflexiones para rechazar la demanda de Aníbal Meneses Brito, haciendo una referencia genérica a las normas aplicables, lo que atendido la naturaleza de la impugnación formulada constituye la omisión de los razonamientos del juicio denunciados por los arbitrios. No hay que olvidar que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público, y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.

La necesidad de un análisis en tal sentido emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida y de lo expuesto por los litigantes, dado que para una adecuada resolución del asunto era imperativo analizar los perjuicios que la detención y secuestro de las víctimas, así como el tiempo transcurrido entre la privación de su libertad, su muerte y las diligencias efectuadas para tener noticias sobre los autores. La controversia planteada versaba justamente sobre los daños que los agentes del Estado de Chile con su actuar causaron a los recurrentes.

**Vigésimo sexto:** Que, como puede advertirse, el fallo incurre en la motivación alegada y consagrada en el artículo 541 N° 9, del Código de Procedimiento Penal, porque no acata la exigencia del literal N° 5 del artículo 500 del Código de Procedimiento Civil, que impone el deber de los jueces de anotar las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la



sentencia, por lo que en las condiciones anotadas los recursos de casación en la forma promovidos en contra del fallo impugnado por los demandantes mencionados, serán acogidos.

**Vigésimo séptimo:** Que, atendido lo resuelto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, no se emitirá pronunciamiento respecto de los recursos de casación en el fondo, por innecesario.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 546 y 548 del Código de Enjuiciamiento Criminal, se decide:

I.- Que **se rechaza** los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la defensa del condenado Iván de la Fuente Sáez, contra el aspecto penal de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

II.- Que **se rechazan** los recursos de casación en el fondo interpuestos por los abogados de los condenados Julio Cerda Carrasco, Alfonso Faúndez Norambuena y Roberto Arcángel Rozas Aguilera, contra la mencionada sentencia.

III.- Que **se acoge** el recurso de casación en la forma en la parte civil, deducido por los abogados querellantes Nelson Guillermo Caucoto Pereira y Andrea Gattini Zenteno por los querellantes que representan y la abogada Carmen Delia Ortiz Acevedo, por sí y por sus representados María del Tránsito Acevedo Manzor, María Magdalena Ortiz Acevedo y Luis Humberto Ortiz Acevedo ante, en contra de la sentencia referida, la que en consecuencia es nula en la parte civil y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente y sin nueva vista.



Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Suplente señor Muñoz P.

Rol N° 152355-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Jean Pierre Matus A., el Ministro Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P., y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B., y Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.

JEAN PIERRE MATUS ACUÑA  
MINISTRO  
Fecha: 03/10/2024 14:06:31

JUAN MANUEL MUÑOZ PARDO  
MINISTRO(S)  
Fecha: 03/10/2024 13:06:27

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 03/10/2024 14:06:31



En Santiago, a tres de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



## SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, tres de octubre de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 547 del Código de Procedimiento Penal y a lo ordenado en el fallo de casación de esta misma fecha y rol, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

### **Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada.

De la sentencia anulada de la Corte de Apelaciones de San Miguel se reproducen sus motivaciones primera a décima.

Del fallo de casación que antecede, se reiteran sus fundamentos décimo noveno a vigésimo quinto.

### **Y se tiene además presente:**

**1º)** Que, en relación con el daño moral, no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

**2º)** Que, en este entendido, acreditada como ha sido la comisión de los delitos, la participación culpable y penada por la ley de los agentes del Estado que intervinieron y la calidad de cónyuges, padres, hijos y hermanos de los actores, surge la efectividad del padecimiento del daño moral invocado por los



demandantes, consistente en el sufrimiento que provoca la desaparición de su familiar, en tan repudiables circunstancias.

3° Que, para establecer el quantum de la indemnización por el daño moral sufrido por las demandantes, se considerará en primer término la prueba rendida por éstos, de la que desprenden sentimientos graves de angustia, dolor, separación, pérdida y frustración, dado su grado de cercanía con las víctimas.

Conforme ha sostenido esta Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”*. Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización, asumiendo la premisa indiscutida de que nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extra patrimonial sufrida. Así, *“el juez al avaluar este daño, debe proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen, cuanto para impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para quien lo demanda”*.

4°) Que, en el mismo sentido, es preciso argumentar que la indemnización de perjuicios por daño moral no puede fijarse recurriendo únicamente a la prudencia de los juzgadores, los que deben observar la realidad de cada caso en particular y los montos que, en casos similares, se han otorgado, para así tender a un trato igualitario entre las víctimas que recurren ante los órganos jurisdiccionales y a los baremos obtenidos del estudio de la jurisprudencia existente sobre la materia.

5°) Que, llevado el análisis a este caso, es posible colegir que los montos indemnizatorios que se fijarán por concepto de daño moral en favor de los demandantes mencionados por el fallo recurrido se ajustarán a los montos





promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, en casos similares. A modo meramente ejemplar citan los pronunciamientos de este Tribunal Rol N° 16.939-2019, de 09 de mayo de 2022; Rol N° 18.762-2019 de 19 de julio de 2022; y 130.949- 2020 de 6 de junio de 2022.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 510 y siguientes del Código de Procedimiento Penal se resuelve que:

I.- **Se rechaza** el recurso de casación en la forma interpuesto por el apoderado de Sergio Ávila Quiroga en contra de la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno.

II.- **Se confirma** en lo demás apelado la referida sentencia.

III.- **Se aprueban** los sobreseimientos definitivos de diecisiete de julio de dos mil doce, escrito a fojas 2087; de catorce de abril de dos mil quince, escrito a fs. 2275; de nueve de julio de dos mil diecinueve, escrito a fs. 6227; de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, escrito a fs. 7122; de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, escrito a fs. 7545, y de dos de diciembre de dos mil veintiuno, escrito a fs. 7625, dictados a consecuencia de los fallecimientos de los inculcados referidos.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Suplente señor Muñoz P.

N° 152.355-2022

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Jean Pierre Matus A., el Ministro Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P., y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B., y Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.



JEAN PIERRE MATUS ACUÑA  
MINISTRO  
Fecha: 03/10/2024 14:06:33

JUAN MANUEL MUÑOZ PARDO  
MINISTRO(S)  
Fecha: 03/10/2024 13:06:29

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 03/10/2024 14:06:33



En Santiago, a tres de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

